

EL SALVAMENTO DE LA OMC

David Ibarra
5 de agosto de 2004

La semana pasada terminó un ciclo de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio con el cometido de revivir el espíritu de la Ronda de Doha, espíritu dirigido a destrabar el desarrollo del mundo periférico a través de la palanca del comercio internacional.

En más de un sentido, el desnivel entre las condiciones creadas artificialmente (reglas inequitativas del intercambio entre países) y las desventajas competitivas reales entre el Primer Mundo y muchos miembros de la periferia, ponen de algún modo en juego la suerte de 2,500 millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios. Los paradigmas económicos del libre comercio, la desregulación, la retirada de los estados de producir, adosados a la revolución tecnológica en los sectores de comunicaciones e informática, no han tenido el impacto esperado en la mayoría de las zonas del mundo. La liberación efectiva de mercados ha sido dispareja y favorecido a algunos países --sobre todo a sus empresas transnacionales-- y perjudicado a otros; como consecuencia se han reducido las tasas de inversión y desarrollo en buena parte de los países periféricos y, en muchos industrializados. En las últimas dos décadas la tasa sostenible de crecimiento de largo plazo se abate sustancialmente (40%-50%) en Africa y América Latina. Más aún, la brecha que separa el ingreso por habitante de esas zonas con las naciones avanzadas sigue ahondándose peligrosamente.

Después del rotundo fracaso de las reuniones de Seattle y de Cancún, se ensombreció la posibilidad de que los países industrializados concedieran la reducción de subsidios y tarifas en materia de producción y exportaciones de la agricultura, las manufacturas, la construcción y los servicios marítimos, actividades de interés a las naciones en desarrollo. Según el Banco Mundial sólo la eliminación de los subsidios a la producción y venta de productos agropecuarios y la apertura de mercados generaría ingresos a todas las naciones por cifras que fluctuarían entre 300 y 500 mil millones de dólares y reduciría la pobreza de muchos millones de personas.

Las probabilidades de que los acuerdos de la OMC de julio pasado tuviesen éxito parecían bastante remotas. Cabe recordar que las decisiones de dicho organismo han de hacerse con el respaldo unánime de sus 147 miembros, cuestión ciertamente difícil. A mayor abundamiento, la incorporación ampliada de países a la Unión Europea y la terminación de su carta constitutiva, así como el proceso electoral norteamericano, al demandar energías políticas importantes, parecían reducir la prelación que podrían dar a los asuntos comerciales. En efecto, de hacer concesiones los países avanzados se verían obligados a alterar el rumbo de sus políticas en materia de protección y subsidio al comercio de productos sensibles --como los agrícolas o los textiles-- y a pagar los costos políticos consecuentes.

Por otro lado, el multilateralismo de la OMC, enfrenta el embate de la suscripción de acuerdos bilaterales o regionales a través de los cuales los países industriales en lo individual pueden dictar condiciones con mayor facilidad. Los convenios de libre comercio de los Estados Unidos con México, Singapur, Chile, Marruecos y Centroamérica, así como la incorporación de nuevos

miembros a la Comunidad Europea, tipifican esa forma alternativa de integrar comercio y mercados. Con todo, abandonar el multilateralismo habría dejado coja a la trilogía de organismos que norman y supervisan los parámetros fundamentales del nuevo orden económico internacional (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio), abriendo cauces a la formación de bloques antagónicos y tensiones inevitables.

El naufragio de Cancún, llevó a la creación del Grupo de los Veinte, encabezado por Brasil y la India, como expresión de la rebelión de los países periféricos al constatar que el régimen vigente de comercio, en vez de satisfacer, contraría los principios de la declaración fundadora de la OMC. Crear otro *impasse* en la adopción de normas internacionales equitativas habría ahondado las brechas que separan las zonas ricas de las pobres o empobrecidas, una de cuyas causas evidentes obedece a la desigual distribución de los beneficios del comercio.

En tales circunstancias, a iniciativa norteamericana se formó el Grupo *Ad hoc* de los Cinco (Australia, Brasil, India, la Unión Europea y los Estados Unidos) a fin de facilitar la formación del consenso en las negociaciones de Ginebra, al incorporar a países desarrollados y en desarrollo con importancia decisiva en materia agrícola. El hecho lo resintieron los países excluidos, pero transitoriamente se ganó el respaldo del Grupo de los Veinte.

Como era de esperar las negociaciones apenas fueron capaces de evitar otro fracaso. El acierto consistió en crear esperanzas en que en el futuro se avanzará en dar acceso y eliminar trabas que reducen artificiosamente la competitividad de los países en desarrollo. Al efecto se convino en establecer un

marco de referencia donde se insertarán las medidas y se definirán los tiempos de aplicación que se vayan consensuando en materia agropecuaria. El camino es largo y está plagado de obstáculos.

El ministerio francés de agricultura anticipa que el nuevo régimen avanzará pausadamente hasta perfeccionarse después de la mitad de la próxima década y la Comisión Europea ha señalado que los cambios pactados tendrán impacto gradual y diferido. Por lo pronto no se alterará el presupuesto agrícola de la Unión Europea (43 mil millones de euros). En España y Francia --al igual que en otros países-- comienzan a surgir resistencias políticas encabezadas por los productores de remolacha y azúcar.

Es esperanzador que los Estados Unidos por vez primera estuviesen anuentes a alterar su política agrícola, reduciendo la protección y abriendo accesos de mercado a los productores de países en desarrollo. Por su parte, la Unión Europea decidió presentar un frente común flexible pese a la resistencia de Francia y otros países. En cierto sentido se visualiza el fin de la guerra de subsidios entre los Estados Unidos y Europa --con alguna participación del Japón-- por el predominio o la protección de los mercados agrícolas. Baste recordar aquí el monto conjunto de las subvenciones y subsidios que otorgan esos países a la producción y exportación agropecuaria exceden los 100 mil millones de dólares anuales. El futuro dirá si ello representa uno de los primeros pasos en la reconstrucción de un bipolarismo o multilateralismo ahora más humano del orden económico mundial, derruido por la debacle de la Unión Soviética y otras economías socialistas.

En rigor, el mayor obstáculo a la implantación de un régimen equilibrado de comercio libre nace de las difíciles disyuntivas políticas y económicas de los países desarrollados. Ahí los agricultores con frecuencia tienen una influencia política desproporcionada sea en materia partidaria o electoral. Además, está en juego el cuidado de la prosperidad económica de ciudadanos o la supervivencia de productores nacionales. De aquí que esos países inevitablemente enfrenten el dilema político y también moral de mantener intocadas sus garantías económicas y sociales internas, o bien, hacer justicia a los pueblos periféricos y absorber costosos ajustes internos. Se trata, además de naciones, que usualmente han sabido imponer acomodos al resto del mundo, conforme a las preferencias dictadas por sus intereses en la configuración o reconfiguración del orden económico internacional.

Sea como sea, se ha inyectado oxígeno al programa de Doha y se ha logrado un acuerdo de marco entre las naciones ricas y las periféricas en materia agrícola. Con alguna carga retórica, los países de menor desarrollo relativo ha recibido reconocimiento en el sentido de reforzar, hacer más preciso y operativo el régimen de trato especial y diferenciado que les debe favorecer. Algún costo en concesiones tendrán que hacer los países de desarrollo intermedio, terreno donde México ha avanzado por efecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En contraste, la liberación de los mercados manufactureros del Primer Mundo a los países en desarrollo ha debido archivarse en la carpeta de los asuntos pendientes. Con realismo, la reunión de ministros de Ginebra decidió no recargar la agenda de las negociaciones con más asuntos escabrosos. No sólo quedaron pospuestas cuestiones de importancia para la periferia, también lo fueron una serie de temas de interés de los países industrializados.

Hay un comienzo alentador por más que las medidas pactadas hayan de concretarse con lentitud y queden pendientes obstáculos enormes a la transformación del comercio mundial en un régimen puesto al servicio del desarrollo. Han ganado los países periféricos en hacer sentir su voz en decisiones que antes solían escapárseles. Aun con rezagos enormes en la nivelación del terreno de la competencia internacional, el ejercicio de Ginebra ha creado la posibilidad de dar alguna atención a los intereses del 75% de los miembros de la OMC. La participación de Brasil en el Grupo de los Cinco y el apoyo consecuente del Grupo de los Veinte, a la solución negociada, demuestra la voluntad del Tercer Mundo de sumarse constructivamente a esfuerzos cooperativos de alcance universal. También las naciones ricas pueden derivar beneficios, incluso morales, al equilibrar el egoísmo extremo de los intereses nacionales con la construcción de regímenes de comercio equitativos en aras de un mundo menos desigual y conflictivo. En términos pragmáticos, la supresión de subsidios y apoyos injustificados aliviará las tensiones fiscales e inflacionarias que experimentan por igual Estados Unidos y Europa.

En suma, como enseña la historia de las luchas obreras, la equidad en el orden económico internacional también habrá de ganarse paso a paso, poniendo a prueba la resistencia, la paciencia, de los débiles. Es igualmente claro que la economía globalizada a la postre resultará inviable sin normas universales que garanticen niveles mínimos, pero crecientes, de justicia distributiva. Las incontenibles presiones migratorias de sur a norte, muestran apenas una dimensión de la magnitud real del problema.